



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, cuatro (4) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Demandante: JAIME ORLANDO CANO CANO
Demandado: ACP COLPENSIONES
Integrado: CEMENTOS ARGOS S.A.
Radicado: 05001 31 05 010 2016 00254 01
Sentencia: S-030

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los **recursos de apelación** interpuestos por los apoderados de las partes **demandante y demandada**, así como a dar trámite al grado jurisdiccional de **Consulta** concedido a favor de COLPENSIONES, con ocasión de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín el día 07 de diciembre de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

JAIME ORLANDO CANO CANO demandó a la ACP COLPENSIONES, para que sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por laborar en actividades de alto riesgo, desde el 5 de agosto de 2009, con los intereses moratorios o en subsidio la indexación y las costas del proceso.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus pretensiones, que laboró en actividades de alto riesgo realizando labores de minería para las empresas INDUSTRIAL HULLERA S.A. desde el 14 de septiembre de 1981 hasta el 30 de septiembre de 1999, MINEROS UNIDOS LTDA. desde el 1° de febrero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2003, y MINEROS UNIDOS S.A. desde el 1° de enero de 2004 hasta el 16 de diciembre de 2008, es decir, por espacio de 27 años y 10 meses, que equivalen aproximadamente a 1.450 semanas cotizadas en labores de minería subterránea (socavones) en alto riesgo. Aduce que nació el 5 de agosto de 1959; que solicitó la pensión especial de vejez el 13 de febrero de 2015, la cual fue negada mediante resolución GNR 362569 del 18 de noviembre de 2015; que el 28 de agosto de 2009 había presentado solicitud al ISS para el reconocimiento de la pensión especial de vejez, que también había sido negada; y que nunca se tuvo en cuenta el verdadero número de semanas cotizadas.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES señaló que no le consta dónde laboró el actor, pero se tendrá como cierto si existe en el expediente material probatorio que así lo acredite; admite como cierta la fecha de nacimiento y la negativa de la pensión solicitada; indica que desconoce entre sus afiliados cuáles realizan actividades clasificadas como de alto riesgo, y que el estudio de las semanas se realizó de acuerdo a las

semanas válidamente reflejadas en la historia laboral. Se opuso a las pretensiones de la demanda y como excepciones propuso inexistencia de la obligación de reconocer pensión especial de vejez por trabajo en minería, inexistencia de reconocer y pagar el retroactivo pensional solicitado, improcedencia de los intereses de mora, improcedencia de la indexación, buena fe, prescripción, compensación e imposibilidad de condena en costas.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 07 de diciembre de 2022, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín **CONDENÓ** a COLPENSIONES a reconocer y pagar al demandante la pensión especial de vejez por el desempeño en actividades de alto riesgo, conforme lo estipulado en el artículo 6º del decreto 2090 de 2003, bajo las condiciones del decreto 1281 de 1994, a partir del 5 de agosto de 2009, con un retroactivo por trece pagos anuales hasta el 30 de noviembre de 2022 equivalente a **\$121'668.687**, y que a partir del 1º de diciembre de 2022, COLPENSIONES seguirá reconociendo una mesada pensional mínima, sin perjuicio de los incrementos anuales de ley. **AUTORIZÓ** los descuentos en salud, y **CONDENÓ** a los intereses moratorios a partir del 14 de junio de 2015 y hasta la fecha de satisfacción total de la obligación. **DECLARÓ** no probada la excepción de prescripción, y **CONDENÓ** en costas a COLPENSIONES.

DEL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado del **demandante** presentó recurso de apelación en cuanto no está conforme con el número de las mesadas pensionales, toda vez que la pensión se causó a partir del 5 de agosto de 2009, por lo que tiene derecho al pago de 14 mesadas anuales.

COLPENSIONES recurrió igualmente exponiendo que i) se debe revocar en su totalidad la sentencia, ya que si bien se verifica en su historia laboral que cumple con los requisitos de semanas generales, esto es, 1.300 semanas, si se analiza la pensión de vejez de alto riesgo, no es cierto que la misma la cause desde el 5 de agosto de 2009, sino del 28 de agosto de 2015, esto es, cuando cumple los 55 años de edad, debiéndose verificar las mesadas adicionales con MINEROS UNIDOS e INDUSTRIAL HULLERA S.A. por los periodos del 1981 a 1983 y 2005 a 2007. ii) Que debe tenerse en cuenta que el demandante pierde el régimen de transición, ya que al 1º de abril de 1994 contaba con 34 años, por lo que no puede predicarse que sea su fecha de causación el 5 de agosto de 2009. iii) Que el demandante no tiene derecho al retroactivo pensional, pues esto está sujeto al fenómeno de la prescripción. iv) Que no se debe condenar a los intereses moratorios, pues no es cierto que no se haya realizado un estudio de la situación del actor, ya que la entidad en su aplicativo interno refleja los diferentes requerimientos, como cobro de deuda al empleador, registro de cotizaciones adicionales por alto riesgo, el registro de la actualización de la historia laboral del demandante y demás actuaciones para determinar si era beneficiario de la prestación, por lo que en las diferentes resoluciones, al estudiar el reconocimiento pensional, el actor no cumple con lo exigido en el decreto 2090 de 2003, por lo que eso no genera un pago injustificado de las mesadas, pues el demandante no demostraba que hubiera causado la prestación como tal, y que si se decide condenar a la entidad, este debe correr después de los 6 meses de presentación de solicitud de reconocimiento pensional; y v) que no se debe condenar en costas, pues debe acogerse el criterio objetivo de imposición, teniendo en cuenta que COLPENSIONES no ha generado erogaciones que generen agencias en derecho o costas procesales.

Conoce igualmente la Sala del asunto por **Consulta** a favor de COLPENSIONES.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término legalmente concedido, la apoderada de COLPENSIONES, señaló que se debe revocar la sentencia de primera instancia toda vez que el demandante, al 1º de abril de 1994, contaba con 34 años de edad y 544.14 semanas de cotización, entendiéndose que no acredita los requisitos contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiario del Régimen de Transición, además de que solo contaba con 415 semanas de cotización especial, por lo que no es procedente la aplicación del Régimen de Transición especial contenido en el Decreto 2090 de 2003, por lo cual la prestación se debió estudiar según lo dispuesto en el artículo 4 del mismo proveído, el cual tampoco cumple, pues tan solo reúne 1.028 semanas, cuando requería 1.300.

CONSIDERACIONES:

Según los recursos de apelación presentados por las partes, y atendiendo al grado jurisdiccional de CONSULTA que opera a favor de COLPENSIONES, en la presente sentencia se abordará el estudio de los siguientes temas y en el orden que se propone: **i)** la procedencia del reconocimiento de la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo bajo el régimen de transición; **ii)** en caso positivo, el momento a partir del cual el demandante puede entrar a disfrutar de la prestación económica; **iii)** el cálculo del retroactivo pensional y si tiene derecho a la mesada 14; **iv)** la condena por intereses moratorios; y **v)** la imposición de las costas procesales a cargo de COLPENSIONES.

i) Del reconocimiento de la prestación especial de vejez bajo el régimen de transición.

Como viene de sintetizarse, el Sr. JAIME ORLANDO CANO CANO, pretende el reconocimiento de la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo – trabajo de minería en socavón - consagrada

en el decreto 2090 de 2003, por acreditar, según sostiene, más de 1.450 semanas como trabajador en ese sector, lo que le permitiría acceder a la pensión desde el cumplimiento de los 50 años, es decir, desde el 5 de agosto de 2009.

En la decisión de primera instancia, el Juez declaró que el demandante causó el derecho a la pensión especial de vejez de acuerdo a la regla general que dispone el decreto 2090 de 2003 y bajo el régimen de transición de esta normatividad, que remite al decreto 1281 de 1994, ordenando el pago de la pensión desde el 5 de agosto de 2009, sin declarar avante la excepción de prescripción.

Contrario a ello, señala la apoderada de COLPENSIONES que el actor no cumple los requisitos para ordenar el reconocimiento de la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo en tanto las semanas de cotización serían insuficientes.

Antes de cualquier consideración en torno a los temas que se discuten, es preciso recordar que en los términos del artículo 1º del Decreto 2090 de 2003, se denominan actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor desempeñada implica disminución de la expectativa de vida saludable, o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta el trabajador con ocasión, precisamente, de ciertas condiciones adversas de trabajo. Dentro de ese grupo de actividades, enlistadas en el artículo 2º, concretamente en el numeral 1º, se establecen los *“Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en subterráneos.”*

Como se indicó en la sentencia de primera instancia, la norma vigente y reguladora de la pensión especial de vejez, es el decreto 2090 de 2003, el cual establece en los artículos 3º y 4º, que para acceder a la pensión especial de vejez por alto riesgo, se debe haber efectuado 700 semanas de cotización especial continuas o discontinuas, contar con 55 años de edad y haber cotizado el número mínimo de semanas para el

sistema general de pensiones a que se refiere el artículo 36 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la ley 797 de 2003.

Asimismo, dicha normatividad en su artículo 6° consagra un régimen de transición, el cual dispone:

“Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.

PARÁGRAFO. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.”

De entrada, debe señalarse que lo dispuesto en el párrafo precedente fue analizado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en las sentencias SL1359-2019 con Rad. 69105 y SL999-2020 con Rad. 67163, concluyendo que exigirle al afiliado los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para acceder a este régimen de transición resulta abiertamente desproporcionado y contrario a la naturaleza especial de esta prestación y a su teleología, por tal razón, al ser esta Corporación la que unifica la jurisprudencia nacional, será acogido dicho enfoque, lo que se traduce en que no será exigible este requisito adicional al actor.

Ahora, no encuentra la Sala motivo alguno para desconocer el planteamiento de la parte actora, el cual apunta al reconocimiento de la prestación de vejez especial con base en lo establecido en el decreto 1281 de 1994, pues observa la Sala que el Sr. JAIME ORLANDO CANO CANO cumple con el requisito de las 500 semanas de cotización especiales que el artículo 6° exige a la entrada en vigencia del decreto 2090 de 2003 (28 de julio de 2003), pues para ese entonces reunía un

total de **1.083.43** semanas cotizadas en actividades de alto riesgo, como se verá a continuación:

Al analizarse las historias laborales que fueron aportadas al expediente¹, actualizada la última de ellas al 27 de abril de 2018, se acredita que el demandante contaba con un total de **1.029** semanas de cotización, todas ellas en actividades de minería con las empresas INDUSTRIAL HULLERA S.A. y MINEROS UNIDOS, las cuales tienen la virtud de ser consideradas como cotizaciones especiales en los términos del Decreto 2090 de 2003.

En dichas historias laborales, tal y como lo expresó el juez, no aparecen reflejadas las semanas laboradas por el actor **del 14 de septiembre de 1981 al 11 de septiembre de 1983**, las cuales fueron certificadas por el liquidador de INDUSTRIAL HULLERA S.A., donde se comprueba que el demandante se desempeñó como minero en labores bajo tierra en alto riesgo durante el período del 14 de septiembre de 1981 al 1º de junio de 1998², siendo dichas semanas tenidas en cuenta en el acta de conciliación³ realizada el 26 de diciembre de 2008 entre el demandante y el liquidador de INDUSTRIAL HULLERA, las cuales fueron debidamente canceladas conforme lo certifica⁴ el revisor fiscal de Cementos Argos S.A. por concepto de aportes a la seguridad social de los empleados de Industrial Hullera S.A., y es por tal razón, que se deben sumar **103,86** semanas faltantes en la historia laboral.

De igual forma, en relación a las cotizaciones efectuadas con MINEROS UNIDOS S.A. tampoco se reflejan las semanas laboradas del **1º de febrero de 2005 al 16 de diciembre de 2008**, cuyo pago fue acordado entre el actor y el representante legal de CEMENTOS ARGOS S.A. como se comprueba en el anexo del acta de conciliación N° 8⁵, en donde se indica que el demandante laboró hasta el 30 de octubre de 2007, pero que además CEMENTOS ARGOS S.A. se obligó a cancelar

¹ PDF 15 y 16 del expediente digitalizado

² Folio 44 de la demanda

³ PDF7 folio 13 a 17

⁴ Folio 68 del PDF 25

⁵ PDF7 folio 19

"los aportes a pensión por ALTO RIESGO en el período comprendido entre el 30 de octubre de 2007 y el 16 de diciembre de 2008"; y en este sentido también se deben contabilizar **199.43** semanas en la historia laboral. Cabe aclarar que no se trata de dar por válida confesión alguna que pudiera ser vertida en dicha acta de conciliación, sino resaltar el compromiso y la obligación que adquirió la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. de cancelar los respectivos aportes a nombre de MINEROS UNIDOS S.A. En Liquidación por el periodo mencionado, previa cuenta de cobro que emitiera el ISS, es decir, a satisfacción de esta entidad, documento que como tal presta mérito ejecutivo. En lo pertinente se dejó asentado lo siguiente:

"El representante de CEMENTOS ARGOS S.A. acepta cancelar a nombre de un tercero como es, la sociedad MINEROS UNIDOS S.A. EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA, con base en los artículos 1625, 1626 y en especial el 1630 del Código Civil el valor de las cotizaciones que por pensiones y en ALTO RIESGO esta empresa adeuda a ISS y hasta el día en que el TRABAJADOR laboró en ella, es decir, hasta el 30 de octubre de 2007, con base en la cuenta de cobro que el ISS emita a su cargo. (...)"

En este punto no sobra agregar que, si COLPENSIONES aún no ha recibido las cotizaciones a que se obligó CEMENTOS ARGOS S.A. en los términos enunciados, conserva en todo caso la posibilidad de ejercer las acciones que sean del caso a fin de preservar sus propios intereses.

Debe puntualizarse, que antes de la vigencia del Decreto 1281 de 1994 no existía para el empleador la obligación legal de efectuar cotizaciones adicionales para la pensión especial de vejez; es decir, las semanas que el trabajador cotizó a las empresas mineras para las que trabajó, deben ser consideradas como realizadas en actividades de alto riesgo, pues si bien los aportes pensionales realizados no registran la cotización adicional que exige la ley, tal omisión de los empleadores no puede ir en desmedro del derecho pensional de su trabajador. Sobre este aspecto se ha pronunciado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la del 18 de marzo de 2009,

rad. 35595, la 38948 de 2012, la SL4616 del 13 de abril de 2016, o la SL 4330 del 25 de agosto de 2021 en la que indicó:

“Igualmente, pese a que no se registra en la historia laboral que en el citado interregno el empleador realizó las cotizaciones especiales, la Sala reitera que si bien esta obligación surgió para los empleadores con la expedición del Decreto 1281 de 1994 - 23 de junio de 1994-, lo cierto es que «antes de esa fecha no era exigible el aporte adicional; inclusive para efectos de que procediera el reconocimiento de la pensión especial de vejez, como mecanismo, se establecía un concepto técnico científico de medicina ocupacional que evidenciara que se estaba expuesto a dichas circunstancias» (CSJ SL1342-2018).

Por lo tanto, ello no implica que los tiempos previos a dicha data puedan ser desconocidos bajo el argumento que la obligación de realizar la cotización adicional no existía, de modo que es completamente válido tener en cuenta los periodos comprendidos entre el 14 de marzo de 1977 a 22 de junio 1994, sin perjuicio de las acciones de cobro que pueda ejercer la entidad de seguridad social contra el empleador por el período comprendido entre el 23 de junio de 1994 y el 8 de mayo de 1996, en los que la obligación de pago ya existía.”

Así pues, realizado el estudio de las semanas cotizadas por el demandante, se puede corroborar que acreditó más de las 500 semanas exigidas a la entrada en vigencia del decreto 2090 de 2003, así como el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de ese mismo año para acceder a la pensión en el año 2014, esto es, 1.275 semanas, las cuales supera por cuanto tiene en total 1.332,29, **lo que lo hace beneficiario del régimen establecido en el decreto 1281 de 1994**, el cual dispone en su artículo 3º, haber cumplido 55 años, cotizar un mínimo de 1.000 semanas, y además de ello, le otorga la prerrogativa que, por cada 60 semanas de cotización especial adicionales a las primeras 1.000 semanas, se disminuirá la edad en 1 año, sin que pueda ser inferior a 50 años.

Al examinar lo referente a **la edad**, sin duda y como lo expresan las Resoluciones⁶ por medio de las cuales le resolvieron las solicitudes pensionales del actor, el Sr. JAIME CANO nació el 5 de agosto de 1959, lo que significa que cumplió los 55 años el mismo día y mes del año 2014, y para esta fecha, en lo que respecta a **las semanas exigidas**, es decir, 1.000, el actor dejó acreditado dichos requisitos, pues cuenta con 1.332,29 semanas en toda su vida laboral, debiéndose en este sentido **CONFIRMAR** la sentencia de primera instancia.

ii) Fecha de reconocimiento de la prestación.

Ahora, en cuanto a la fecha de reconocimiento de la prestación de conformidad con la prerrogativa que se acaba de ver, es decir, para establecer si hay lugar a disminuir la edad en un año por cada 60 semanas adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, es preciso indicar que tal posibilidad debe analizarse teniendo como punto de partida el momento en el que se hace la reclamación a la entidad.

En este caso, el actor se presentó en primera oportunidad a solicitar la prestación económica el 28 de agosto de 2009, momento en el cual recién había cumplido los 50 años de edad y, según el conteo de semanas, reunía 1.317,15 semanas de cotización, es decir, un exceso de 317,15 semanas y por ende la posibilidad de disminuir la edad en 5 años y hasta los 50 años de edad, razón por la cual es posible reconocer la pensión desde la edad de los 50 años según lo solicitado en la demanda, vale decir, a partir del **5 de agosto de 2009** como lo determinó el juez de primera instancia, debiéndose **CONFIRMAR** la sentencia de primer grado en tal sentido.

iii) Retroactivo pensional y mesada catorce.

⁶ Resoluciones N° 013341 del 8 de julio de 2010 y GNR 362569 del 18 de noviembre de 2015

Antes de hacer las operaciones respectivas a efectos de verificar el valor del retroactivo causado y el valor de la mesada pensional reconocida, resulta indispensable revisar la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada. En tal sentido, debe tenerse en cuenta el término de 3 años establecido en nuestro ordenamiento jurídico laboral, para la prescripción de las acciones que emanan de leyes sociales, la que podrá ser interrumpida con el simple reclamo del afiliado.

En el presente caso, cabe señalar que existió una primera solicitud para el otorgamiento de la pensión especial de vejez radicada el 28 de agosto de 2009, la cual fue resuelta negativamente a través de la resolución 013341 del 8 de julio de 2010, sin interponerse recurso alguno, ni acudirse a la jurisdicción ordinaria; por el contrario, el demandante elevó una segunda reclamación presentada el 13 de febrero de 2015, y resuelta por COLPENSIONES mediante Resolución GNR 362569 del 18 de noviembre de 2015.

En este sentido, conforme al artículo 151 del CPTYSS, es claro que el primer reclamo escrito interrumpe la prescripción, pero por una sola vez, por lo que, al no interponerse la demanda dentro de los 3 años posteriores a la primera solicitud, el término de prescripción se deberá contabilizar desde la presentación de la demanda, la cual fue realizada el 21 de febrero de 2016, **prescribiendo** así las **mesadas anteriores al 21 de febrero de 2013**.

En cuanto a la **mesada 14**, ante todo debe diferenciarse entre la causación y el disfrute de la pensión, pues son dos figuras jurídicas que tienen efectos propios, ya que la primera se cumple una vez reunidos los requisitos mínimos establecidos en la ley para acceder a la prestación, en tanto el disfrute se da cuando se solicita el reconocimiento de la pensión a la entidad de seguridad social, previa desafiliación del seguro de invalidez, vejez y muerte y donde el beneficiario entra a gozar de la misma.

En este orden, el artículo 142 de la ley 100 de 1993 consagró la mesada adicional de junio, la cual se reconocía a los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, en el sector privado y del Instituto de Seguros Sociales, así como los retirados y pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, a cancelarse con la mesada del mes de junio de cada año, a partir de 1994.

Sin embargo, el acto legislativo 01 de 2005, que empezó a regir el 29 de julio de 2005, en su inciso 8° dispuso que las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia de dicha enmienda, no podrían recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año; no obstante, el parágrafo transitorio 6° del mencionado acto dispuso que: *“se exceptúan de lo establecido por el inciso 8°. del presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año.”*.

Así las cosas, y con lo expuesto anteriormente, se puede comprobar que el demandante causó su derecho a la pensión especial de vejez el 5 de agosto de 2009 y su prestación económica no es superior al salario mínimo legal, por lo que el actor tiene derecho a la mesada 14.

Como consecuencia, el retroactivo pensional causado entre el 21 de febrero de 2013 y hasta la fecha dada por el juez, esto es, 30 de noviembre de 2022, arroja un valor de **\$104’392.182**, debiéndose **MODIFICAR** el valor ordenado por el juez de primera instancia. Así,

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2013	1,94%	12,26	\$ 589.500	\$ 7.227.270
2014	3,66%	14	\$ 616.000	\$ 8.624.000

2015	6,77%	14	\$ 644.350	\$ 9.020.900
2016	5,75%	14	\$ 689.454	\$ 9.652.356
2017	4,09%	14	\$ 737.717	\$ 10.328.038
2018	3,18%	14	\$ 781.242	\$ 10.937.388
2019	3,80%	14	\$ 828.116	\$ 11.593.624
2020	1,61%	14	\$ 877.803	\$ 12.289.242
2021	5,62%	14	\$ 908.526	\$ 12.719.364
2022	13,12%	12	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000
			TOTAL	\$ 104.392.182

iv) Intereses moratorios

Ahora bien, frente a la inconformidad traída por la demandada respecto a los intereses moratorios, es claro que éstos fueron creados por la ley 100 de 1993 para resarcir al beneficiario del retardo en que pueda incurrir la entidad de seguridad social que, estando obligada al pago de las mesadas pensionales de que trata dicha ley, no las cubre de manera oportuna.

No obstante, no habrá lugar a imponer al reconocimiento de intereses moratorios en este caso, ya que la prestación que se reconoce al demandante lo es como beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 6º del Decreto 2090 de 2003, y bajo la interpretación de las sentencias SL1359 de 2019 y SL999 de 2020, en donde no se exige el requisito adicional señalado en el parágrafo del artículo 6 del decreto 2090 de 2003, que sin lugar a dudas si era exigido para las fechas en que el ISS en su momento, y luego COLPENSIONES, a través de las resoluciones N° 013341 del 8 de julio de 2010⁷ y GNR 362569 del 18 de noviembre de 2015⁸, consideró que no se cumplían los presupuestos para acceder a la prestación reclamada, pues el actor no era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993, lo cual resultaba atendible para dicha época, por tal razón y ante el cambio de jurisprudencia, se **REVOCARÁ** la sentencia en este sentido.

⁷ Folios 30 a 32 de la demanda

⁸ Folios 22 a 29 de la demanda

No obstante, debido a que la suma adeudada por concepto del retroactivo pensional sufrió un deterioro económico por el transcurso del tiempo, se reconocerá la indexación sobre la misma y hasta cuando se verifique su pago, por haberse pedido así en la demanda inicial.

v) Costas procesales

En innumerables providencias se ha dejado claro que nuestra ley procesal ha consagrado en esta materia el criterio objetivo, es decir, que las costas corren en todo caso a cargo del vencido en juicio, sin que sea admisible tener en consideración la conducta asumida por las partes, es decir, sin considerar si se actuó o no de buena fe, ya que sólo basta el hecho de haber resultado vencido en juicio para que se imponga tal condena. En el presente caso, COLPENSIONES fue vencido, pues tiene la obligación de reconocer la pensión especial de vejez con el retroactivo pensional deprecado y la indexación de la condena.

En consecuencia, la sentencia de primera instancia deberá ser **CONFIRMADA, MODIFICADA y REVOCADA.**

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín el día 07 de diciembre de 2022, pero la **MODIFICA** en lo que corresponde al retroactivo pensional, para en su lugar **CONDENAR** a COLPENSIONES a reconocer y pagarle al demandante el retroactivo pensional comprendido entre el 21 de febrero de 2013 al 30 de noviembre de 2022, por valor de **\$104'392.182**. Asimismo, la

REVOCA en el sentido de absolver a COLPENSIONES de la condena impuesta por concepto de intereses moratorios, y en su lugar se condena a la indexación del retroactivo pensional hasta cuando se verifique su pago

Sin costas en esta instancia.

Salvamento de voto.

RADICADO: 05001 31 05 010 2016 00254 01

FRANCISCO ARANGO TORRES, magistrado de la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, presento SALVAMENTO DE VOTO en la sentencia del proceso de la referencia, en los siguientes términos:

En el presente caso, el actor pretende el reconocimiento de pensión especial de vejez, incluyendo para completar el número de semanas requeridas legalmente para ello, tiempos que aduce laboró con la empresa liquidada INDUSTRIAL HULLERA S.A. entre el del 14 de septiembre de 1981 al 11 de septiembre de 1983, certificado por el liquidador de la citada empresa, del que se aduce fueron pagadas las cotizaciones al sistema pensional por CEMENTOS ARGOS S.A.

Igualmente se aduce, que en relación a las cotizaciones efectuadas con MINEROS UNIDOS S.A. tampoco se reflejan las semanas laboradas del 1° de febrero de 2005 al 16 de diciembre de 2008, las cuales fueron acordadas entre el actor y el presentante legal de CEMENTOS ARGOS S.A. como se comprueba en el anexo del acta de conciliación N° 89, en donde se indica que el demandante laboró hasta el 30 de octubre de 2007, pero que además CEMENTOS ARGOS S.A. se obligó a cancelar *“los aportes a pensión por ALTO RIESGO en el período comprendido entre el 30 de octubre de 2007 y el 16 de diciembre de 2008”*; y en este sentido también se deben contabilizar **199.43** semanas en la historia laboral.

Las razones que me llevan a disentir de la Sala mayoritaria, son las siguientes:

1. La Sala mayoritaria da por probado que el demandante laboró en la empresa liquidada INDUSTRIAL HULLERA entre el 14 de septiembre de 1981 al 11 de septiembre de 1983, cuando existen serias dudas que ello sea cierto, pues si bien obra en el expediente una certificación presuntamente suscrita por el liquidador de la citada empresa fechada el 23 de abril de 2014, en la que se certifica que el actor trabajó en la empresa liquidada INDUSTRIAL HULLERA entre el 14 de septiembre de 1981 y el 1 de junio de 1998, también obra en el expediente (fol. 35 a 41 del documento del expediente digital denominado "001Demanda.pdf") un acta de conciliación fechada el 26 de diciembre de 2008 entre el demandante, la empresa liquidada INDUSTRIAL HULLERA (suscrita por el liquidador de esta empresa, el mismo que firma la aludida certificación) y CEMENTOS ARGOS S.A. en la que se concilian algunos derechos laborales anotándose expresamente en ella que el actor comenzó a trabajar en la empresa liquidada INDUSTRIAL HULLERA el 31 de octubre de 1988 con contrato de trabajo a término indefinido, en los siguientes términos:

Ingresé a laborar en la empresa INDUSTRIAL HULLERA S.A EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA el 31 de octubre de 1988, tenía un contrato a término indefinido. La empresa debido a un sinnúmero de situaciones económicas y de mercado del carbón se vio abocada a solicitar a la Superintendencia de Sociedades, la Liquidación Obligatoria de la empresa, la cual fue decretada por esa entidad mediante el Auto 410-7777 del 4 de noviembre de 1997. Como producto de esa liquidación y de acuerdo con la ley 222 de 1995, presentamos las acreencias

1

También se anota en la referida acta de conciliación que lo que se concilia son unas semanas de cotización, que deben aparecer desde el 12 de septiembre de 1983 y el 1 de junio de 1998, las que se obliga pagar CEMENTOS ARGOS S.A. Esto se consigna:

En ese orden de ideas el EX TRABAJADOR debe aparecer con un numero de semanas cotizadas a la seguridad social en pensiones y alto riesgo igual o equivalente a las causadas desde el 12 de septiembre de 1983 fecha en la que inició el régimen pensional en Amagá y se cotizó la primera semana, si para esa fecha se encontraba vinculado a la empresa, o si ingresó a laborar en una fecha posterior al 12 de septiembre de 1983, desde ese día , hasta el día en

3

que terminó su contrato con INDUSTRIAL HULLERA, es decir hasta el 1 de junio de 1998 , todas en alto riesgo, se excluyen las semanas en que los trabajadores estuvieron en huelga.

Así, ante la evidente contradicción entre los referidos documentos, se hacía necesaria haber decretado prueba para establecer cuál de las dos fechas de inicio del contrato de trabajo del actor con la empresa liquidada INDUSTRIAL HULLERA, es la verdadera, atendiendo el conocimiento (así sea privado) de la práctica de certificar tiempos por liquidadores de empresas liquidadas en favor de trabajadores para obtener fraudulentamente beneficios del sistema de seguridad social.

Y es que es absolutamente relevante que en la contestación a la demanda CEMENTOS ARGOS S.A. que fue vinculada de manera oficiosa al proceso, se opone a que el tiempo presuntamente laborado por el actor entre el 14 de septiembre de 1981 al 11 de septiembre de 1983, en la empresa liquidada INDUSTRIAL HULLERA S.A. esté a su cargo, alegando estar a cargo de la liquidada INDUSTRIAL HULLERA S.A., con lo que tácitamente está desconociendo el citado acuerdo.

2. La Sala mayoritaria da por probado, sin que a juicio de este servidor judicial lo esté, que CEMENTOS ARGOS S.A., pagó al ISS hoy COLPENSIONES a favor del actor el cálculo actuarial por las cotizaciones al sistema pensional por el periodo del 14 de septiembre de 1981 al 11 de septiembre de 1983 presuntamente laborado por el demandante.

El anterior hecho lo considera la Sala mayoritaria probado con una certificación proveniente de CEMENTOS ARGOS S.A. que es del siguiente tenor:

CERTIFICA:

Que de acuerdo con los registros en libros oficiales de contabilidad y los soportes suministrados por la Administración, la compañía Cementos Argos S.A., identificada con Nit 890.100.251-0, realizó pagos por \$1.724.825.658 a la Coordinación Nacional de Cobro Coactivo del Instituto de Seguros Sociales I.S.S. por concepto de aportes a la seguridad social de los empleados de Industrial Hullera S.A., como se detalla a continuación:

Fecha de pago	No. de comprobante de pago	Importe del pago
19/03/2008	ND	\$ 1.553.000.000
08/09/2008	64998231	61.568.515
02/12/2008	69543820	36.819.630
24/06/2009	82586536	33.016.528
22/02/2011	120592074	26.074.860
12/03/2009	75834432	14.346.125
Total		\$ 1.724.825.658

La presente certificación se expide a los treinta (30) días de mayo de 2014, por solicitud de la Administración.


JUAN DAVID LÓPEZ MONTOYA
Revisor fiscal
T.P. 139.197-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

Respecto de la anterior certificación, en primer lugar, el pago de una obligación no puede ser acreditado con una sola certificación proveniente del deudor, pues el pago se debe ser probado con evidencias del efectivo pago, no que con la sola afirmación del deudor en una certificación en la que aduce haberlo efectuado.

Sobre que la prueba del pago de una obligación, no puede ser una certificación o constancia que provenga del mismo deudor, se ha pronunciado reiterativamente el Consejo de Estado, en múltiples sentencias como al siguientes:

- Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 47282.
- Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 52538.
- Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 16 de mayo de 2019, Exp. 62748.

- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 16.887, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
- Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 14 de junio de 2019, Exp. 60118.
- Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 11 de julio de 2019, Exp. 63108.
- Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de septiembre de 2019, Exp. 49986.
- Sentencia 2007-00588/42037 de enero 31 de 2020 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C, Rad.: 250002326000200700588 (42037), Consejero Ponente: Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas, En esta sentencia, esto se anotó:

“3.4.5.1. Ahora bien, sobre la prueba del pago de la indemnización impuesta o conciliada por la actora, la jurisprudencia de la Sección Tercera, referida por esta Subsección en varias oportunidades⁽⁶⁵⁾ y recientemente reiterada por la Sala Plena de la Sección⁽⁶⁶⁾ ha considerado que:~o

“La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo de la suma dineraria que le fue impuesta por condena judicial, o conciliación, o cualquier otra forma de terminación del conflicto, a través de prueba que generalmente⁽⁶⁷⁾ es documental, constituida por el acto en el cual se reconoce y ordena el pago a favor del beneficiario y/o su apoderado **y por el recibo de pago o consignación y/o paz y salvo que deben estar suscritos por el beneficiario.**~o~

*El pago efectivo, en los términos del artículo 1.626 del Código Civil, “es la prestación de lo que se debe” y **debe probarlo quien lo alega**, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.757 ibídem. Conforme a lo anterior, no basta que la entidad pública aporte documentos emanados de sus propias dependencias, si en ellos no está la manifestación expresa del acreedor o beneficiario del pago, sobre su recibo a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza sobre el cumplimiento de la obligación.*

En efecto, la ley procesal civil, al regular los juicios ejecutivos, prevé que las obligaciones de pago requieren de demostración **documental que provengan del acreedor**, circunstancia que en esos casos permite la terminación del proceso por pago.”

De otra parte, en la aludida certificación de CEMENTOS ARGOS S.A., no se dice que el pago que ahí se certifica, lo sea por concepto de cálculo actuarial de cotizaciones pensionales a favor del demandante por el presunto tiempo laborado en la empresa liquidada INDUSTRIAL HULLERA entre el 14 de septiembre de 1981 al 11 de septiembre de 1983

Pero, es más, si el acta de conciliación entre el demandante y CEMENTOS ARGOS S.A., está fechada el 26 de diciembre de 2008 y en la certificación, los pagos más relevantes se anotan que se efectuaron entre el 19 de marzo y el 2 de diciembre de 2008, **¿cómo pueden haber pagado en fecha anterior a que se efectuó la conciliación?**

De otra parte, es bien conocido por otros procesos que ha conocido la Sala, en contra de la empresa liquidada INDUSTRIAL HULLERA y de CEMENTOS ARGOS S.A., que en efecto esta empresa asumió el pago voluntario como un tercero de acreencias pensionales que estaban a cargo de la empresa liquidada INDUSTRIAL HULLERA, por autorización que en tal sentido efectuó el Ministerio del Trabajo el que emitió concepto previo favorable, mediante oficio N° 23782 de 9 de octubre de 2012, para que INDUSTRIAL HULLERA S.A. “en liquidación obligatoria” normalice el pasivo pensional a su cargo, a través del mecanismo de asunción del mismo por parte de las sociedades CEMENTOS ARGOS S.A., COLTEJER S.A. y FABRICATO S.A. en virtud del artículo 2 del Decreto 4014 de 2006.

La Superintendencia de Sociedades, mediante Auto 405-05403 de noviembre 2 de 2012, autoriza la normalización del pasivo pensional de INDUSTRIAL HULLERA S.A. “en liquidación obligatoria” a través del mecanismo de asunción por un tercero (CEMENTOS ARGOS S.A., COLTEJER S.A. y FABRICATO S.A.)

En razón a lo anterior, la certificación del pago emitida por CEMENTOS ARGOS S.A., bien puede ser concerniente a la deuda que asumió del pasivo pensional de la empresa liquidada INDUSTRIAL HULLERA, por lo que no se puede tener a tal certificación como una “**LLAVE MAESTRA**” o “**CERTIFICACIÓN UNIVERSAL**” para probar el pago de cualquier deuda que haya contraído CEMENTOS ARGOS S.A. a favor de trabajadores de la empresa liquidada INDUSTRIAL HULLERA

Se repite, es relevante que según se anota en el acta de conciliación antes aludida fechada el 26 de diciembre de 2008 entre el demandante, la empresa liquidada INDUSTRIAL HULLERA y CEMENTOS ARGOS S.A., que expresamente se indicó que esta empresa asumía el pago de obligaciones pensionales de los trabajadores de la empresa liquidada

INDUSTRIAL HULLERA, causada desde el 1 de septiembre de 1983 siempre y cuando el trabajador acredite haber trabajado desde esta fecha, por lo que no es razonable pensar que la aludida certificación se refiera a pagos de cotizaciones del demandante del periodo del 14 de septiembre de 1981 al 11 de septiembre de 1983, periodo del que entre otras cosas, tradicionalmente CEMENTOS ARGOS S.A. ha tenido varios litigio oponiéndose a su pago, argumentado que en el pasivo pensional que asumió pagar de la liquidada INDUSTRIAL HULLERA, no incluye tiempo anteriores al 11 de septiembre de 1983, argumentado que ello no se obligó en la autorización efectuada por el Ministerio del Trabajo, mediante oficio N° 23782 de 9 de octubre de 2012, aprobado por la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto 405-05403 de noviembre 2 de 2012.

Por lo anterior no es razonable pensar ni presumir, que la aludida certificación de pago emitida por CEMENTOS ARGOS S.A. sea referida a pagos de cotizaciones del demandante del periodo del 14 de septiembre de 1981 al 11 de septiembre de 1983, que entre otras cosas expresamente en la conciliación se anotó que no asumiría.

Es tan claro que el pago de la certificación referida no pertenece al aludido periodo del 14 de septiembre de 1981 al 11 de septiembre de 1983, que CEMENTOS ARGOS S.A. a folio 10 del documento de expediente digital denominado “023 ANEXOS RESPUESTA DDA. CEMENTOS ARGOS...” que presenta como prueba, relaciona las personas por las que efectúa el pago, y lo ciclos de cotización pagados, en la que, respecto del demandante, se relacionan como pagados los de “9501” a “9802”. Así se registra:

3366568 SANCHEZ OCAMPO FELIX A.	1,642,802	-	1,680,771	9501	9802
3366598 GRANADOS OROZCO RUBEN DE	1,221,319	-	1,225,056	9501	9802
3366605 URREGO CANO HERNAN DE JES	1,585,083	4,839	1,633,084	9501	9802
3366631 GARCIA LEON EDUARDO	1,284,836	-	1,327,945	9501	9802
3366644 CANO CANO JAIME ORLANDO	1,028,858	-	1,055,769	9501	9802
3366657 ROJAS GALLEGU IVAN RAUL	1,548,125	4,853	1,582,222	9501	9802
3366676 HERRERA HINCAPIE GUSTAVO	1,537,721	-	1,579,881	9501	9802

Así entonces, aun siendo cierto que el demandante trabajó en liquidada INDUSTRIAL HULLERA entre el 14 de septiembre de 1981 y el 11 de septiembre de 1983, se debió condenar a CEMENTOS ARGOS S.A. (quien fue vinculada de oficio al proceso) a pagar el cálculo actuarial por tal periodo para que el mismo se pudiera tenerse en cuenta para reconocer

cualquier derecho, pensional al demandante a cargo de COLPENSIONES, pues el pago no fue acreditado en este proceso.

3. En la Sentencia aprobada por la Sala mayoritaria, se indica que al accionante, se le tiene en cuenta igualmente **199.43** semanas que no aparecen en su historia laboral, referidas a las cotizaciones efectuada con MINEROS UNIDOS S.A. por el tiempo laborado entre el 1° de febrero de 2005 al 16 de diciembre de 2008, las cuales fueron acordadas entre el actor y el representante legal de CEMENTOS ARGOS S.A. como se comprueba en el anexo del acta de conciliación N° 8¹⁰

Como en el referido documento denominado “ANEXO AL ACTA DE CONCILIACION No. 13” que obra a folios 42 del documento del expediente digital denominado “001Demanda.pdf” se anota expresamente que el demandante laboró con MINEROS UNIDOS S.A. hasta el 30 de octubre de 2007, no se puede asumir por la Sala, que laboro hasta *el 16 de diciembre de 2008*, porque CEMENTOS ARGOS S.A. se obligó a cancelar *“los aportes a pensión por ALTO RIESGO en el período comprendido entre el 30 de octubre de 2007 y el 16 de diciembre de 2008”*. Esta se anota en la referida acta:

El representante de CEMENTOS ARGOS S.A. acepta cancelar a nombre de un tercero como es, la sociedad MINEROS UNIDOS S.A. EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA, con base en los artículos 1625, 1626 y en especial el 1630 del Código Civil el valor de las cotizaciones que por pensiones y en ALTO RIESGO esta empresa adeuda a ISS y hasta el día en que el TRABAJADOR laboró en ella, es decir, hasta el 30 de octubre de 2007, con base en la cuenta de cobro que el ISS emita a su cargo. Además, acepta pagar a título de mera bonificación voluntaria que en nada obedece a obligaciones legales o extralegales de carácter laboral, los aportes a pensión por ALTO RIESGO, en el período comprendido entre el 30 de octubre de 2007 y el 16 de diciembre de 2008.

En razón a lo anterior, al actor solo se le podría tener como cotizado el periodo del 1° de febrero de 2005 al 30 de octubre de 2007, que equivale a **141,42** semanas y no las **199.43** semanas, que se le tiene en cuenta.

Ahora con la sola existencia de la referida acta que data del 26 de diciembre de 2008, en la que CEMENTOS ARGOS S.A., se compromete a realizar pagos de aportes pensionales del demandante por el tiempo laborado entre el 1° de febrero de 2005 y el 30 de octubre de 2007, no se

puede tomar ese tiempo a cargo de COLPENSIONES, sin que CEMENTOS ARGOS S.A. efectivamente hubiere probado que efectuó el referido pago, pues nótese como en la historia laboral del actor solo le aparece tiempo laborado y cotizado con MINEROS UNIDOS S.A. hasta el mes de enero de 2005, por lo que si CEMENTOS ARGOS S.A., acepta que el actor en realidad trabajó hasta el 30 de octubre de 2007 (así se anota en repetidas veces en la referida acta), para tener en cuenta el tiempo del 1° de febrero de 2005 al 30 de octubre de 2007, se debió ser condenado CEMENTOS ARGOS S.A., a pagar las cotizaciones con sus intereses o el cálculo actuarial por el citado tiempo, y no imponerle este periodo a COLPENSIONES, por el solo hecho que CEMENTOS ARGOS S.A. se comprometió a pagarlo, y sin que haya prueba que el actor efectivamente trabajó hasta el 30 de octubre de 2007, como expresamente se anota en la referida conciliación, y más cuando en el proceso obra prueba como la certificación de folio 43 del documento del expediente digital denominado “001Demanda.pdf” de la ARL PREVISORA S.A. que fue retirado del sistema de riegos laborales el 11 de noviembre de 2005, lo que es un serio indicio que el actor solo habría trabajado con MINEROS UNIDOS S.A. hasta esta fecha y no hasta el 2007 como lo asume CEMENTOS ARGOS S.A. en la conciliación, y sin haber probado que haya pagado las cotizaciones que acepta que el demandante trabajó en MINEROS UNIDOS S.A.. esto se nota en la referida certificación:

POSITIVA

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE

Una vez consultada la base de datos de la compañía, la persona relacionada a continuación registra afiliación a nuestra Administradora de Riesgos Laborales a través del empleador MINEROS UNIDOS S.A con NIT 811015154 con riesgo 5.

NOMBRE	CC	AFILIACION	RETIRO
JAIME ORLANDO CANO CANO	3366644	01 de febrero de 1999	11 de noviembre de 2005

Esta certificación se expide a los veintiséis (26) días del mes de enero de 2015.

Nótese como la referida acta de conciliación, data del 26 de diciembre de 2008, por lo que por lo que, si COLPENSIONES en el año 2015 que niega la pensión, solo registra cotizaciones hasta enero de 2005, es un indicio serio que el pago no se ha efectuado o por lo menos no ha sido aceptado por COLPENSIONES que el pago se efectuó, y sin que se haya probado que el actor o CEMENTOS ARGOS S.A. hayan enterado a COLPENSIONES, de tal arreglo, para que este lo aceptara.

Respecto de un acta de conciliación igual a la que se trae como prueba en este caso, tuvo la oportunidad este Sala de decisión pronunciarse, en el proceso de radicado 05001-31-05-004-2015-01608-01 indicando que ella sin más elementos probatorios, no es oponible a COLPENSIONES. Esto se dijo:

“Revisada el acta de la conciliación, con ella, a juicio de esta Sala, no se prueba que en efecto el actor haya laborado en actividades de alto riesgo de trabajo de minería en subterráneo o socavones en la empresa INDUSTRIAL HULLERA, pues en primer lugar las concesiones o reconocimiento de derechos que se hagan las partes de una conciliación, no puede por si solo sin más pruebas de la existencia del derechos surtir efectos a cargo de terceros que no participaron en la conciliación, en este caso el ISS hoy COLPENSIONES que ninguna participación tuvo en la aludida conciliación.”

De aceptarse que COLPENSIONES, deba tener en cuenta tiempo presuntamente laborado por trabajadores con empresas o personas naturales, por la solo existencia de arreglo privado o judicial en la forma que caprichosamente acuerden entre ellos, sin que COLPENSIONES o cualquiera otra AFP haya tenido conocimiento de tal arreglo, y sobre todo sin que se haya probado que el pago se hizo, abre una puerta enorme para defraudar al sistema pensional, que no debería ser permitido por la judicatura.

Y es que se dice lo anterior, porque si un empleador por cualquier razón no afilió a su trabajado a la seguridad social en pensiones, conforme al Art. 33 de la Ley 100 de 1993, con las reformas de la Ley 797 de 2003, es posible tener en cuenta el tiempo no cotizado, con el pago de los aportes por el sistema del cálculo actuarial a satisfacción de COLPENSIONES

como lo ordena la citada norma legal, no de la forma como lo acuerden privada o judicialmente las partes.

Piénsese que un presunto trabajador y un presunto empleador, persona natural o jurídica, acuerdan en conciliación judicial o extrajudicial o cualquier otra forma de composición de controversias, que el trabajador laboró treinta (30) años con el empleador y que por ello paga la suma de \$ 10.000.000, y que por este solo hecho COLPENSIONES o cualquiera otra AFP debe asumir este tiempo para reconocer prestaciones a favor del trabajador sin poder oponerse, bajo el argumento que el arreglo entre el trabajador y el empleador hace tránsito a cosa juzgada, esto se convertiría en una “patente de corzo” para defraudar al sistema pensional, quedando las AFP inermes ante el fraude, pues no pueden exigir el pago del cálculo actuarial como legalmente corresponde y a su satisfacción, sino como a su voluntad y capricho lo acuerden el trabajador y empleador.

En los anteriores términos dejo salvado mi voto respecto de la decisión de la Sala mayoritaria.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado

Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia
Firma Con Salvamento De Voto

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **942fd1560227b7c4ec4d27db7a45611ea06d53c76f8b068064e9f4e4b310bc61**

Documento generado en 04/03/2024 10:53:02 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>